

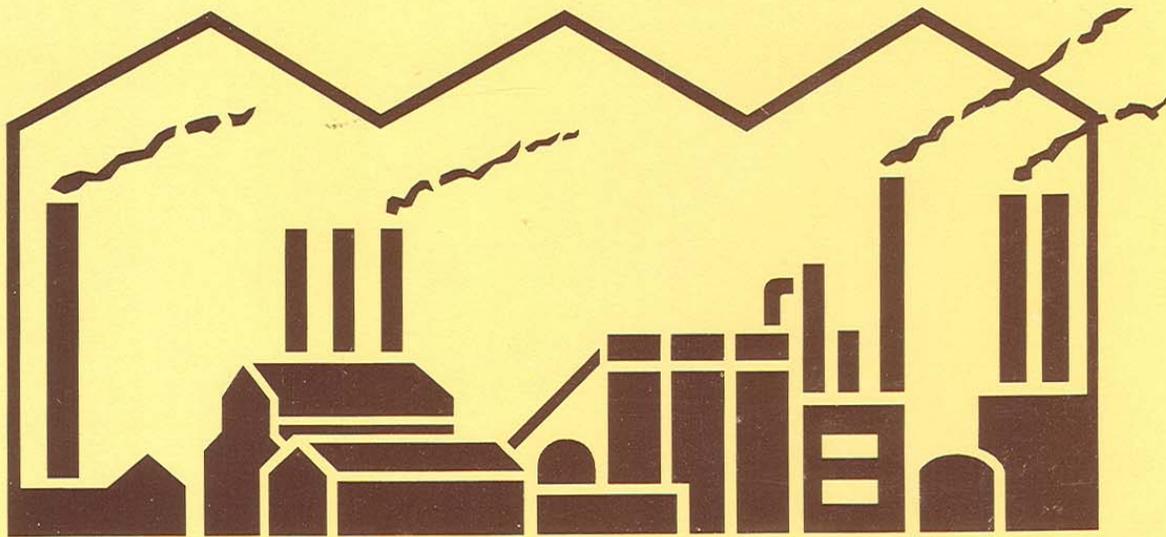
Reporte de Investigación
19

ALTERNATIVAS PARA LA ECONOMIA MEXICANA

Síntesis de Diagnóstico y Proposiciones

Seminario Nacional
del 8 al 23 de noviembre de 1993

JOSE LUIS CALVA TELLEZ



Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y
Tecnológicas de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial
Universidad Autónoma Chapingo
Marzo 1994

ALTERNATIVAS PARA LA ECONOMIA MEXICANA

SINTESIS DE DIAGNOSTICOS Y PROPOSICIONES

SEMINARIO NACIONAL

del 8 al 23 de noviembre de 1993

José Luis Calva Tellez

Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y
Tecnológicas de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial
Universidad Autónoma chapingo
Marzo 1994

INTRODUCCION

Los objetivos que motivaron la organización del **Seminario Nacional sobre Alternativas para la Economía Mexicana**: realizar un análisis integral de la situación y perspectivas de la economía mexicana con el fin de determinar las alternativas viables de política económica que permitan a México lograr un crecimiento económico sostenido con menor vulnerabilidad frente al exterior y mejor distribución del ingreso en el marco de un desarrollo ambientalmente sustentable, han sido cumplidos a lo largo de once jornadas de trabajo en este seminario general y de cuarenta y cuatro jornadas de trabajo en los seminarios modulares realizados en las sedes de las respectivas instituciones organizadoras.

El análisis interdisciplinario y multiespecializado de la economía mexicana y de su entorno mundial, desplegado por más de trescientos científicos universitarios en ambas fases del Seminario, arroja resultados altamente relevantes en tres grandes direcciones: 1) la determinación de los márgenes de libertad que el actual entorno económico mundial otorga a México para el diseño e instrumentación de una nueva estrategia de desarrollo económico; 2) la evaluación objetiva, basada en las evidencias empíricas, de los principios, instrumentos y resultados de las políticas neoliberales de ajuste económico y estabilización instrumentadas en México paulatinamente desde 1983 y aceleradamente a partir de 1988; 3) la delineación de los principios e instrumentos fundamentales de una estrategia económica alternativa de desarrollo *incluyente de la mayoría de los empresarios y trabajadores mexicanos*, asentada en equilibrios macroeconómicos sólidos que emerjan del fortalecimiento del aparato productivo *mexicano*.

Los análisis desarrollados en el curso del Seminario contemplaron, como un desenlace inminente, la aprobación del TLC de Norteamérica por el Congreso de los Estados Unidos, por lo cual los resultados del esfuerzo interdisciplinario y multiespecializado desplegado se ubican en este contexto. Desde luego, los análisis abordaron tanto los efectos de la operación del TLC en su contenido actual, como la posibilidad de aplicar la cláusula de escape o la de realizar futuras renegociaciones del TLC, ahora promovidas por México en interés de los mexicanos.

La síntesis que ahora presentamos constituye una *versión preliminar (provisional)* que integra solamente *elementos y principios fundamentales* de los diagnósticos y proposiciones desarrollados en este esfuerzo académico. Una versión posterior de esta síntesis se aproximará de manera sistemática y circunstanciada a la riqueza de los diagnósticos y esfuerzos propositivos desarrollados en el Seminario.

ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL

Las peculiaridades del entorno económico y político mundial condicionan las libertades y restricciones que tienen las naciones para diseñar e instrumentar sus estrategias viables de desarrollo económico.

Determinar los márgenes nacionales de maniobra que México tiene para optar por un modelo alternativo de crecimiento económico sostenido con equidad y sustentabilidad ambiental, fue el objetivo de los tres primeros módulos del Seminario.

Los procesos objetivos de globalización económica (comercial, financiera, productiva y tecnológica) son presentados por la ideología neoliberal como procesos novísimos y arrolladores a los cuales México debe insertarse *precisamente a la manera neoliberal* (con apertura comercial a ultranza, liberalización de la inversión extranjera y retiro del Estado de sus funciones económicas como orientador, regulador y promotor del crecimiento económico y el bienestar social) so pena de quedar al margen del progreso y del pasaje al primer mundo. De este modo, el modelo económico neoliberal es presentado como el único razonablemente posible bajo el actual entorno mundial.

Sin embargo, la experiencia universal no corrobora esta fatalidad. Ni ha sonado el fin de la historia, ni está suprimida la diversidad de estrategias de desarrollo económico endógeno e inserción variada en los procesos económicos universales.

La globalización no implica la desaparición de las contradicciones que han acompañado al desarrollo de la economía mundial: no uniformiza los estilos de desarrollo, no suprime las contradicciones entre los polos del poder económico mundial, ni entre éstos y los países en desarrollo. Por el contrario, se acentúan las pugnas y contradicciones que se plasman en los bloques económicos y en la competencia entre ellos.

De hecho, el actual entorno mundial, caracterizado por la enconada competencia entre Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea por la redistribución del dominio económico mundial, configura una *multipolaridad económica* real cuyos países líderes irradian políticas económicas diversas, en contraposición con la presión integradora, uniformizadora y globalizadora de los organismos multilaterales. En este escenario, si bien tiende a acentuarse la debilidad económica y política del conjunto de los países en desarrollo, se extienden también los *márgenes de maniobra* para el diseño e instrumentación de estrategias nacionales de desarrollo económico. ...

En estas condiciones, "América Latina no debe casarse con un solo interlocutor. En un mundo multipolar la monogamia es punible" (Guerra-Borges).

El neoliberalismo económico presenta la formación de bloques económicos como un proceso arrollador del que México "no debe quedar fuera", debiendo insertarse *precisamente a la manera neoliberal* al bloque de Norteamérica. Hay en este postulado dos grandes inexactitudes: ni la formación de bloques es un proceso arrollador e inescapable, ni la manera neoliberal de integración tiene lugar en ninguna parte del mundo, excepto en el TLC de Norteamérica. Nada tiene en común este proyecto con la experiencia integradora de los países del Norte y Sureste asiáticos, que desarrollan procesos de integración económica *no formalizada* y, por tanto, preservando su soberanía económica y su capacidad de fomentar el desarrollo endógeno de sus aparatos productivos. Asimismo, la integración económica

europaea, cuyo origen *se remonta a 1957*, es un proyecto radicalmente distinto del NAFTA: 1) la CEE constituye básicamente una integración entre iguales (el PIB *per cápita* de España, Grecia y Portugal es, respectivamente, el 76%, 53% y 55% de la media comunitaria); 2) en la CEE existen fondos comunitarios para compensar los costos de la integración y equiparar el desarrollo de los países y regiones; 3) existe un libre flujo de mano de obra. En cambio, la integración de México al bloque de Norteamérica, fue proyectada por los gobiernos conservadores de México, Estados Unidos y Canadá como una integración *neoliberal*, que instituye la igualdad entre desiguales, sin fondos compensatorios ni libre flujo de mano de obra.

La disolución de los Estados-nación y el derrumbe de las fronteras nacionales para arribar a una sociedad mundial y un Estado universal, presentado por los ideólogos neoliberales como un evento inminente en el mediano plazo, no parece tan cercana. Por el contrario, a la luz del comportamiento real del mundo, los Estados nación están llamados a desempeñar un papel aún relevante en el desarrollo de la humanidad: precisamente el de elevar a los pueblos rezagados a estadios más altos de riqueza y bienestar, contrarrestando las tendencias espontáneas del mercado a concentrar los beneficios del crecimiento económico en los países ricos.

Así, las estrategias desplegadas por los países de reciente industrialización del Pacífico asiático, cuyos procesos de desarrollo acelerado les han permitido establecer una sólida base productiva interna, compartir el avance científico-técnico y elevar sensiblemente los niveles de ingresos de sus poblaciones, nada tienen que ver con políticas neoliberales (apertura comercial unilateral y abrupta, libertad irrestricta a la inversión extranjera directa, y nulo o débil intervencionismo estatal). "El éxito del crecimiento exportador coreano no ha radicado en una supuesta estrategia de libre mercado [...]. La clave, más bien, parece encontrarse en la efectividad de la intervención estatal para un alto estímulo a la actividad empresarial bajo las directrices de una planificación de largo plazo. El gobierno utilizó su propiedad sobre la banca y su control sobre el sistema de crédito para promover, dirigir y regular el crecimiento económico. (...) Este plan, al establecer directrices respecto al crecimiento exportador y de integración interna, mejoró las expectativas de inversión privada. El incentivo de la ganancia capitalista fue,

sin lugar a dudas, la palanca fundamental del despegue económico, a la vez que las medidas de protección de dichas expectativas. En particular hay que señalar que, a pesar de tener un costo de mano de obra (salarial y no salarial) muy bajo" los fabricantes coreanos requirieron de "medidas de protección y crédito subsidiado para lograr competir con los productores más eficientes durante los años de su incursión inicial en los mercados externos (1963-1972)". Además, cabe observar que "las políticas de protección, subsidios y tipo de cambio no generaron distorsiones en contra de la rentabilidad de las ramas potencialmente exportadoras" (José Luis Estrada).

La España adherida a la Comunidad Económica Europea, fue presentada por los publicistas neoliberales de México como el espejo de nuestro risueño futuro bajo el TLC. Por eso el Seminario analizó el caso español. Los tecnócratas mexicanos se solazaron imaginando para México una entrada masiva e ininterrumpida de capital extranjero creyendo que los enormes flujos de ahorro externo entonces observados en España serían incesantes. Esto último fue también supuesto por los gobernantes españoles, quienes se negaron a corregir el déficit comercial suponiendo que sería eternamente financiable con la entrada de capitales, gracias a la incorporación de España a la Comunidad Europea. Al igual que los tecnócratas mexicanos, establecieron altos tipos de interés para atraer inversión extranjera, los cuales significaron una seria limitación para la inversión doméstica. Así, la apertura comercial -unida a la sobrevaluación cambiaria y encarecimiento del crédito- provocó la quiebra de numerosas empresas españolas. Como resultado, el desempleo alcanzó en 1991 al 25% de los trabajadores y la pobreza se extendió a 8 millones de españoles. La crisis financiera aplazada por el gobierno español mediante altos tipos de interés, finalmente estalló con la súbita huída de más de veinte mil millones de dólares, obligando al gobierno a realizar tres devaluaciones de la peseta en un sólo año. Este es el verdadero espejo del futuro de México, donde la reciente aprobación del TLC puede simplemente *postergar* la crisis financiera externa y el ajuste cambiario. Las condiciones son peores para México, porque mientras España está integrada a una Comunidad Económica que dispone de fondos compensatorios para amortiguar los costos de la integración económica, México no contará con un solo dólar de fondos compensatorios, inexistentes en el TLC de Norteamérica.

Chile es también presentado como un éxito de la economía neoliberal. Sin embargo, las políticas económicas de los *Chicago boys* desembocaron en desequilibrios económicos internos y externos: aumento de la deuda, especulación, quiebra de empresas, alto nivel de desempleo y deterioro del bienestar social. El gobierno se resistió a modificar la estrategia friedmaniana en espera de un ajuste automático, hasta que la crisis obligó a abandonar las recetas de los *Chicago boys*. El Estado pasó a jugar un papel activo en el proceso económico: interviene bancos, reestatiza empresas, indexa salarios a los precios, subsidia actividades económicas, establece un tipo de cambio competitivo, eleva los aranceles del 10% al 35% y acentúa la diversificación de relaciones económicas para ponerse a salvo de las crisis económicas de Estados Unidos.

Estos, así como los otros modelos de crecimiento económico analizados en el Seminario, corroboran que no existe *un paraíso neoliberal* en el ninguna parte del mundo. Los países exitosos, de industrialización reciente o antigua, han aplicado políticas de fomento, caracterizadas por la protección y liberalización comercial selectivas y por el relevante papel del Estado en el desarrollo económico y social.

El mundo hacia un nuevo paradigma

El paradigma neoliberal presenta síntomas de agotamiento en el mundo entero. No es algo casual. Las "modernizaciones" neoliberales se inspiraron "en las 'novedosas' ideas económicas de fines del siglo XVIII; pero "en la formulación teórica magistralmente elaborada por Adam Smith, la 'mano invisible' de la competencia era la responsable de los ajustes automáticos de un mercado donde ningún oferente ni demandante era capaz de influir decisivamente en la determinación de los precios de las mercancías". Sin embargo, "esos postulados teóricos son ajenos por completo a la realidad actual". "La economía internacional tiene hoy una estructura fuertemente oligopólica [...] en la cual predominan un puñado de grandes empresas y megabancos transnacionales" (Alejandro Alvarez). En estas condiciones, las prácticas adamsmithianas tenían necesariamente que arrojar enormes costos

económicos y sociales en contra de los países y clases débiles y en favor de los fuertes, además de ser "incapaces de resolver los desequilibrios macroeconómicos y de superar la esclerosis del lento crecimiento" (Alejandro Alvarez).

Por esto, los tiempos apuntan hacia el reemplazo del paradigma neoliberal por un nuevo paradigma económico.

Las dicotomías Estado-mercado, protección-libre cambio, interés social-interés individual, ejes en torno a los cuales se desarrollan los grandes ciclos del pensamiento económico, tienden a desembocar en un nuevo equilibrio. La borrachera neoliberal de los pasados tres lustros, con su pesada herencia de pauperización y sufrimiento, tiende a ser superada. La humanidad no puede pasar al siglo XXI con una ideología del siglo XVIII: el liberalismo económico, bajo el catecismo de Adam Smith.

El reconocimiento de las debilidades del mercado y del carácter depredador de las recetas de ajuste económico del FMI y del Banco Mundial, por cada vez mayor número de organismos multinacionales (UNICEF, UNCTAD, CEPAL, etc.); la derrota de los gobiernos neoconservadores de Bush y Mulroney-Campbell, son señales del rumbo de los nuevos cambios.

El *nuevo paradigma económico* cuyos principios comienzan a configurarse no sólo en artículos académicos sino también en publicaciones de organismos multinacionales, establecerá un sano equilibrio entre el mercado y el Estado, entre los intereses individuales y el interés público, entre el libre cambio y la protección, entre el hombre y su medio ambiente, entre la eficiencia y el bienestar social, permitiendo arribar al siglo XXI con una economía "de rostro humano" (UNICEF).

ECONOMIA MEXICANA

Evaluación general del actual modelo económico

El déficit comercial, que en 1992 ascendió a 20,676 millones de dólares, y el desbalance de la cuenta corriente, que alcanzó los 22,809 millones de

dólares, colocan a la economía mexicana en una situación altamente vulnerable. Los precarios equilibrios macroeconómicos pasaron a depender de una variable *exógena*: el flujo creciente de ahorro externo y la retención en el país del capital extranjero colocado en los mercados accionarios y de *dinero caliente*.

La vulnerabilidad externa es mayor ahora que en los días previos a la crisis de la deuda que estalló el 20 de agosto de 1982. Entonces, los pasivos globales de México con el exterior (incluyendo deuda e inversión externas) ascendían a poco menos de 90,000 millones de dólares, mientras que ahora superan los 200,000 millones de dólares.

Así, la economía mexicana se encuentra en riesgo de una crisis financiera más profunda que la de 1982, no sólo por la magnitud de nuestros pasivos externos, sino por la volatilidad de las inversiones extranjeras de cartera, que no teníamos al principiar la década pasada.

La aprobación del TLC por el Congreso de Estados Unidos permitirá *posponer* la crisis financiera externa, pero no desactiva la bomba de tiempo del desbalance comercial y de la sobrevaluación cambiaria.

La vulnerabilidad externa es consecuencia natural de los principios e instrumentos esenciales de la estrategia económica actual: apertura comercial unilateral y abrupta, abatimiento a toda costa de la inflación a través de la *cuasi* fijación del tipo de cambio, abandono de las políticas de fomento productivo y aplicación de medidas contractivas de la inversión pública y del ingreso de las mayorías nacionales, que ahondaron los desequilibrios económicos internos

Desde luego, el modelo neoliberal, aplicado con la virtuosa pureza de un experimento de laboratorio a partir del PSE de 1987, tiene sus "éxitos": reducción de la inflación, eliminación del déficit fiscal y moderado crecimiento económico en los años 1989-1993. Pero es necesario encarar tanto la fragilidad de tales "éxitos" como su *desproporción* respecto a sus costos económicos y sociales.

Primero: si los flujos de ahorro externo se interrumpen o si no permanecen en México los capitales volátiles previamente ingresados, lo cual puede ocurrir aun con el TLC, los frágiles logros macroeconómicos se derrumban: la reserva del Banco de México será succionada, obligando a

realizar, se quiera o no, un brusco ajuste cambiario, que dará al traste con la reducción de la inflación y con la eliminación del déficit fiscal.

Segundo: el modesto crecimiento económico alcanzado (3.09% anual de 1989 a 1993) resulta absolutamente desproporcionado respecto al enorme crecimiento de los pasivos externos (a tal grado inherente al actual modelo económico, que el FMI estima que para que México logre un modesto crecimiento del 2.7% anual, requiere 22,700 millones de dólares de recursos externos netos). Lo peor radica en que el ingreso de estos recursos mediante la hipoteca del país y la enajenación de activos nacionales, sirve para pagar la factura de las mercancías cuya importación liberalizada *golpea y arruina ramas enteras de la producción nacional*.

Tercero: los *costos sociales* del ajuste neoliberal no sólo son enormes, sino también injustificados y contraproducentes.

Cuarto: los *costos* microeconómicos del ajuste neoliberal son no menos gravosos. La profundización de la desarticulación interna y de la desigualdad en el desarrollo de las ramas de la producción, el deterioro de la infraestructura, la microeconomía tambaleante de numerosas empresas que producen en condiciones de desventaja competitiva por los rezagos estructurales, la adversa paridad cambiaria y el encarecimiento del crédito, son realidades que cuestionan los principios e instrumentos del modelo.

Por ello, el país requiere una nueva estrategia de desarrollo económico que nos permita alcanzar un crecimiento económico sostenido con menor vulnerabilidad externa, que corrija la desarticulación y desigualdad en el desarrollo del aparato productivo, que mejore la distribución del ingreso y eleve el bienestar general en el marco de un desarrollo ambientalmente sustentable.

Política de comercio exterior y de fomento del mercado interno

La apertura comercial es rasgo esencial e instrumento fundamental de la estrategia económica neoliberal. La abrupta reducción de los aranceles y de las barreras no arancelarias que protegían a la producción nacional, fue

adoptada como instrumento fundamental de la estrategia *del cambio estructural*, que induciría la modernización de la planta productiva nacional y el crecimiento de las exportaciones, al obligar a las empresas a elevar su eficiencia y a aprovechar las ventajas comparativas del país bajo la presión de la competencia y el libre acceso a la tecnología, equipos e insumos del exterior.

Los resultados son diferentes de los esperados. La pretendida modernización del aparato productivo nacional sólo ha comprendido a unas cuantas ramas de la producción, al tiempo que se profundiza la desarticulación y la desigualdad en el desarrollo de la industria y del sector primario. Si bien las exportaciones manufactureras han crecido, este crecimiento no ha tenido un efecto de arrastre sobre el conjunto de la producción nacional, debido a que tales exportaciones acusan una dependencia creciente de insumos y equipos importados. Simultáneamente, las ramas que producen para el mercado interno han visto seriamente deterioradas sus posibilidades de acumulación, tecnificación y expansión, y, en algunos casos, incluso de simple sobrevivencia, al enfrentar la competencia de mercancías importadas en condiciones desventajosas (de crédito, tipo de cambio, infraestructura y políticas de fomento).

Como resultado, mientras las exportaciones totales de mercancías crecieron 34% entre 1988 y 1992, las importaciones crecieron 154% en ese lapso. Así, de un superávit comercial de 7,190 millones de dólares en el 1987, se pasó a un déficit comercial de 20,676 millones de dólares en 1992, el más alto en la historia del país.

De esta manera, el pasaje abrupto de un modelo basado primordialmente en la sustitución de importaciones mediante elevados coeficientes de protección, a un modelo de economía abierta basado en las ventajas comparativas, está causando más daños que beneficios a la economía nacional.

Una estrategia de crecimiento que combine sustitución de importaciones con agresiva promoción de exportaciones, que mantenga un tipo de cambio competitivo e instrumente políticas sectoriales que impulsen el desarrollo productivo endógeno, parece ser la estrategia más adecuada a nuestras condiciones internas y de entorno internacional.

No se trata de volver al proteccionismo a ultranza, sino de racionalizar la apertura comercial, haciéndola selectiva y gradual. Se trata de diseñar una política de comercio exterior que estimule el desarrollo armónico del aparato productivo nacional.

Por el contrario, la estrategia económica neoliberal basada en la abrupta apertura comercial remata en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La prisa del gobierno mexicano por suscribir el TLCN, con el afán de atraer los flujos de ahorro externo que permitan equilibrar en el corto plazo la balanza de pagos y sostener de este modo los precarios equilibrios macroeconómicos, ha propiciado que los resultados de la negociación sean tremendamente adversos para México, presionado a hacer enormes concesiones en agricultura, industria e inversión extranjera, para establecer una igualdad comercial y de inversión entre naciones estructuralmente desiguales.

De esta manera, el TLC neoliberal compromete los intereses del desarrollo nacional en el largo plazo. En este escenario se abren dos opciones: la aplicación de la *cláusula de escape* o una renegociación del TLC que considere las profundas asimetrías estructurales entre México y los países del Norte y, por tanto, contemple amplias *salvaguardas*, verdaderas y efectivas disposiciones laborales y ecológicas así como *fondos compensatorios* (análogos a los estructurales y de cohesión social de la CEE) que detengan y en su caso contrarresten los daños económicos y sociales causados por la integración económica. Para este fin, el reforzamiento de vínculos de la sociedad civil de México con la de Estados Unidos y Canadá [(para hacer frente a la "clase transnacional" (Estela Gutiérrez), hay que "transnacionalizar la sociedad civil": Carlos Vilas)], que permitirá unir fuerzas en torno a demandas sociales y ecológicas de interés común, es necesario para enfrentar y vencer el poder de las corporaciones transnacionales, impulsoras y beneficiarias del TLC de Norteamérica.

El objetivo es reorientar el rumbo del pasaje de México al siglo XXI a través de "un modelo de desarrollo comprensivo, integrador, incluyente" (David Márquez Ayala). "La historia económica nos enseña que todos los países hoy potencias sustentaron su consolidación primero y su internacionalización después en un mercado interno sólido y una estructura económica integrada" (David Márquez Ayala).

El modelo neoliberal, instrumentado paulatinamente a partir de 1983 y precipitadamente a partir de 1988, arrancó del diagnóstico de que la crisis de la deuda externa derivó de tres "causas principales: *insuficiencia del ahorro interno, falta de competitividad del aparato productivo nacional y desequilibrios en nuestro patrón de desarrollo* entre agricultura, industria y comercio". Para erradicar estas causas fue diseñada la "*estrategia del cambio estructural*" o de "*modernización económica*" cuyo objetivo primordial fue "*eleva el ahorro interno y fortalecer la competitividad de nuestras exportaciones* so pena de depender nuevamente en el futuro de recursos externos en forma excesiva".

A once años de aplicada esta estrategia, los problemas del financiamiento del desarrollo se han agravado, sobre todo a partir del PSE de 1987, cuando la política cambiaria se subordina a la estabilización de los precios y la "racionalización de la protección" se precipita en una apertura comercial unilateral y abrupta.

En vez de elevarse el ahorro interno, se desplomó del 12.8% del PIB en 1981 al 6.8% en 1991 y al 6.5% en 1992.

De este modo, la inversión ha pasado a depender de manera preponderante del ahorro externo, que representó el 51.8% del ahorro total en 1992 (contra 31.7% en 1981). Y no obstante el dramático incremento de la dependencia financiera, los coeficientes de inversión (19.6% del PIB en 1991 y 21.7% en 1992) están por debajo de los alcanzados en 1981 (26.4%) o en 1980 (24.8%).

Ahora bien, el ingreso al país del ahorro externo en los volúmenes requeridos por el actual modelo, enfrenta dificultades crecientes, aun después de la ratificación del TLC de Norteamérica por el Congreso estadounidense.

Por ello, el gobierno mexicano ha echado mano, desde los últimos meses de 1992 y en 1993, del expediente de elevar las tasas internas reales de interés para atraer y retener capitales extranjeros en títulos de deuda pública interna.

Pero al hacerlo, ha *aplazado simplemente la crisis financiera externa y la ha convertido en crisis financiera interna* de numerosas empresas

mexicanas hundidas en carteras vencidas o en serios aprietos de liquidez, agobiadas por el encarecimiento del crédito, que se agrega a los pasados efectos de la apertura comercial unilateral y abrupta exacerbados por la sobrevaluación cambiaria.

La estrategia de financiamiento del desarrollo debe ser esencialmente reformulada. "Es una aberración [...] aceptar el desequilibrio externo crónico y sus secuelas de endeudamiento y concesiones al capital extranjero como naturales y hasta positivas. Ya hemos conocido el costo de esta política y el país no debe volver a pagarlo" (David Márquez).

El saneamiento del financiamiento de nuestro desarrollo debe arrancar de la revisión de las políticas de comercio exterior y cambiaría para reducir sustancialmente el déficit comercial y el de cuenta corriente, haciendo descender verticalmente los requerimientos de ahorro externo. Además, debe sustentarse en una efectiva reactivación de la planta productiva, que hoy trabaja con muy bajos coeficientes de utilización de su capacidad instalada, así como en la instrumentación de políticas estructurales y crediticias que incentiven el ahorro y la inversión *productiva* en áreas estratégicas y con alto efecto multiplicador sobre la producción, el empleo y la inversión.

Una nueva renegociación de la deuda externa, bajo condiciones de equidad y corresponsabilidad de los acreedores y libre de condicionamiento de política económica, es también necesaria. Así mismo, se requiere reformular la política de promoción de la inversión extranjera, bajo esquemas regulatorios que le otorguen certidumbre y a la vez favorezcan el desarrollo nacional. "El criterio rector de una política alternativa en materia de inversión extranjera debe ser el logro de aportes significativos por parte del capital extranjero: 1) en la elevación de la productividad y en la difusión del progreso técnico; 2) en la integración creciente con las empresas locales; 3) en el acceso a mercados externos. De esta forma, la política de IED debe armonizar con una política de desarrollo sectorial que estimule la integración y la competitividad locales y no solamente las actividades exportadoras" (Raúl Ornelas).

Finalmente, un modelo alternativo de desarrollo económico podrá disminuir la volatilidad de la bolsa mediante el fortalecimiento de la planta productiva y el logro de equilibrios macroeconómicos, sólidamente

sustentados sobre bases endógenas, otorgando certidumbre a las inversiones y contribuyendo así a "aislar en mayor medida los movimientos de la inversión de cartera de las expectativas a corto plazo" (Juan Castaingts).

Estabilización económica

La estrategia antiinflacionaria aplicada a partir de diciembre de 1987, basada en la reducción y eliminación del déficit fiscal y, sobre todo, en la *cuasi* fijación del tipo de cambio y en la abrupta apertura comercial, así como en el establecimiento de expectativas inflacionarias en función del aumento autorizado del salario mínimo nominal, ha logrado efectivamente el abatimiento de la tasa inflacionaria.

Sin embargo, esta reducción de la inflación carece de bases económicas internas sólidas y depende de un factor *exógeno*: la afluencia a México de ahorro externo para equilibrar la balanza de pagos y sostener tanto el tipo de cambio como la apertura comercial.

Además, los costos económicos y sociales de la estrategia estabilizadora han sido muy altos para el país.

Cabe, por tanto, reformular radicalmente los instrumentos de política estabilizadora.

La estabilidad de precios sólo será viable y tendrá permanencia en el largo plazo cuando derive de sólidos equilibrios macroeconómicos asentados en bases endógenas y, por tanto, en el incremento sostenido y generalizado de la productividad y la producción.

La revisión de las políticas de comercio exterior y cambiaria, así como la instrumentación de políticas sectoriales que fomenten el desarrollo y la articulación interna del aparato productivo nacional, son elementos esenciales de una estabilización realmente viable y sostenible". "Se tienen que conjuntar las políticas correctivas inmediatas de los principales desajustes de la economía y la realización de transformaciones estructurales de la esfera productiva, capaces de asegurar el crecimiento de largo plazo y el bienestar de la población" (Arturo Huerta).

La eliminación del déficit fiscal, objetivo e instrumento esencial de la estrategia económica neoliberal, es presentado como uno de los mayores logros del modelo. Sin embargo, la experiencia universal muestra situaciones de bonanza con finanzas públicas deficitarias en niveles manejables (Canadá: 1.3% en 1972 y 2.9% en 1989; Japón: 1.9% y 2.6%; Bélgica: 4.3% y 7.5%; Estados Unidos: 1.5% en 1972 y 2.8% en 1989; Italia: 8.7% y 10.6%; Malasia: 9.4% y 2.6%, etc.). Por ello, el superávit fiscal no es en verdad un logro sino, más bien, un estigma perverso del modelo neoliberal mexicano, por los enormes costos económicos y sociales que ha implicado.

La reducción general del gasto público programable (32.3% entre 1981 y 1992) no sólo ha producido efectos contractivos inmediatos sobre el nivel general de la actividad económica y el bienestar social, sino que compromete el porvenir de nuestro país, al contraer severamente el gasto en fomento sectorial (-66.3% en desarrollo rural; -90.6% en pesca; -83.5% en desarrollo industrial; -61.2% en comercio y abasto; -51.9% en turismo) y contraer más aún la *inversión pública* (-52.4% en general, entre 1982 y 1992) afectando el desarrollo de sectores estratégicos (-58.4% de inversión en energéticos; -71.4% en desarrollo rural; -92% en pesca), y frenando la ampliación y aun el mantenimiento de la infraestructura económica y social (-45.9% en comunicaciones y transportes; -51.6% en desarrollo urbano; -41.6% en salud y laboral; -8.1% en educación; -29.6% en desarrollo social en general; -75.2% en comercio y abasto). Y si bien el gasto social global (suma del gasto en educación, salud, laboral, solidaridad, desarrollo regional y desarrollo urbano) ha crecido en los últimos años como porcentaje del gasto programable del sector público, el cual pasa del 32% en 1988 al 49.3% en 1992; también es cierta la disminución del gasto social *per cápita* en 15% entre 1982 y 1992.

Además, si bien la política de ingresos públicos ha permitido incrementar las entradas federales en un 2% PIB (mediante el incremento de los ingresos tributarios y no tributarios del gobierno federal), implicó un cambio en la estructura del ingreso fiscal que impactó adversamente el desarrollo económico (al aumentar, por ejemplo, las exacciones fiscales a

PEMEX del 3.7% del PIB en 1981 al 5% del PIB en 1991) y, además, profundizó la regresividad del sistema impositivo y, por tanto, la inequidad en la distribución del ingreso.

La privatización de empresas públicas -elemento crucial en la eliminación del déficit fiscal- no sólo se realizó de manera indiscriminada y dudosa, sino que en vez de aprovecharse como instrumento de verdadero *fomento de la inversión privada*, se ha realizado en favor de grupos oligopólicos que reconcentran en su favor la riqueza y el ingreso, dando lugar a rentas de monopolio (brusca elevación de tarifas telefónicas, alza desmedida de los márgenes de intermediación financiera, etc.) que gravitan sobre el conjunto de la sociedad y del aparato productivo.

La sobrevaluación del tipo de cambio ha servido también para abatir el déficit fiscal (al bajar, medido en pesos mexicanos, el pago de los servicios de la deuda externa), pero sus secuelas adversas no sólo se manifiestan en la penuria de numerosas ramas productivas afectadas por crecientes importaciones, sino que han sido causa de que se profundice la vulnerabilidad externa.

En suma: el ajuste neoliberal de las finanzas públicas ha arrojado enormes costos económicos y sociales y ha profundizado la inequidad en la distribución del ingreso.

Por ello, es necesaria una política de ingreso y de gasto público en un modelo alternativo de desarrollo económico que mantenga dentro de márgenes manejables la brecha ingreso-gasto sin incurrir en políticas contraccionistas que afectan las bases del desarrollo económico sostenido en el largo plazo.

El saneamiento de las finanzas públicas sobre bases sólidas debe sustentarse en la reactivación y el crecimiento de la producción y la productividad. En consecuencia, la política de gasto público debe dirigirse a impulsar el desarrollo económico sobre un horizonte de planeación de largo plazo, atendiendo rezagos productivos y fomentando sectores y áreas estratégicas y prioritarias, particularmente la formación de recursos humanos, la infraestructura económica y social, la industria energética, el desarrollo científico-técnico, el sector agropecuario y las ramas de la industria con alto efecto de arrastre sobre la actividad económica. De este modo, el propio

crecimiento endógeno de la producción y la productividad eliminarán presiones sobre las finanzas públicas. El tratamiento adecuado del problema de la deuda externa y la reformulación de la política crediticia, deben eliminar presiones sobre el gasto y coadyuvar a la reorientación del presupuesto público en interés de la nación. La progresividad del impuesto sobre la renta en los estratos de muy altos ingresos, afectando especialmente a las ganancias especulativas, es también elemento esencial de una estrategia alternativa.

Concretamente, es necesario y factible expandir el gasto público en un 7% del PIB, dirigiendo este incremento a la atención de las prioridades nacionales. Su financiamiento no inflacionario implica "reducir en 2% del PIB los servicios de la deuda; la modificación del sistema tributario, acrecentando en 2% del PIB los impuestos a los estratos más ricos de la población; y un déficit fiscal manejable del 3% del PIB" (Mario Zepeda).

Además, se requiere aumentar la eficiencia en la aplicación del gasto público. Es necesario terminar con las "formas de caciquismo, corrupción e ineficiencia en la aplicación del gasto público, que hoy prevalecen". "Esto implica establecer un verdadero federalismo en la política de ingreso y gasto público y aumentar la vigilancia del destino del gasto a través de participación democrática de la ciudadanía" (Jorge Calderón).

Se requiere una nueva política en materia de empresa pública que considere simultáneamente el funcionamiento eficiente de las paraestatales en términos de mercado y su papel relevante en la nueva política industrial, que "exige establecer objetivos precisos, definir prioridades, marcar campos de acción específicos del sector público, así como establecer mecanismos y medios adecuados en proyectos de inversión concretos en el sector productivo y en la infraestructura física y social" (Arturo Guillén).

Costos sociales del modelo neoliberal

Los *costos sociales del modelo neoliberal* conforman una *deuda social* muy superior a la deuda externa de México. La política de topes salariales por debajo del índice inflacionario y el abarrotamiento de los mercados de trabajo

por la casi nula generación de empleos, provocaron la severa degradación de la participación de los salarios en el producto nacional, del 37.5% del PIB en 1981 al 25.8% en 1991, lo cual significa que los asalariados tuvieron una pérdida acumulada de 246,940 millones de dólares entre 1982 y 1993 (suponiendo que no haya declinado más la participación de los salarios en el PIB en 1992 y 1993). Los salarios mínimos sufrieron una reducción salvaje: de 131.4 pesos en enero de 1982 (a precios de 1978) a sólo 42.9 pesos en enero de 1993, es decir quedaron reducidos a la tercera parte; y los ingresos netos campesinos declinaron severamente por el deterioro de sus términos de intercambio y el estancamiento productivo.

Las políticas contractivas provocaron el desplome vertical del nivel general de empleo: entre 1982 y 1992, en el conjunto de la economía mexicana solamente se crearon 2.3 millones de empleos remunerados, pero cada año tocaron las puertas del mercado laboral 1.1 millones de jóvenes demandantes de empleo. De este modo, 9.8 millones de jóvenes no encontraron empleos remunerados en ese lapso (se estima que alrededor de la mitad de ellos emigraron de manera ilegal a los Estados Unidos); y *el mito genial* del desempleo pasó a deambular en las calles de las urbes y a encubrirse bajo múltiples formas de actividad marginal.

Como resultado, se registró una degradación generalizada de los niveles de vida de las mayorías nacionales: los estratos medios se empobrecieron, los pobres descendieron a la miseria y los miserables vieron aumentar la morbilidad y mortalidad por desnutrición de sus hijos (el porcentaje de niños con desnutrición severa en el medio rural pasó 7.7% en 1979 al 15.1% en 1989; la mortalidad infantil por desnutrición entre los niños de 1 a 4 años se incrementó 262% entre 1982 y 1988 y entre los niños menores de 1 años se incrementó 420%). Tan sólo entre 1981 y 1987 el número de pobres pasó de 32.1 a 41.3 millones; y la población en pobreza extrema ascendió a cerca de 20 millones al final de la década, aumentando término medio en 350,000 miserables por año. El 40% de la población, que aún en 1984 percibía apenas el 14.36% del ingreso nacional, vio disminuir su participación a sólo el 12.86% en 1989; y el 30% de la población de los estratos de medianos ingresos, que aún en 1984 participaban del 23.98% del ingreso total, vieron descender su participación al 21.48%. En contrapartida, el 10% de la

población con ingresos mayores aumentó su participación del 32.77% al 37.93% del ingreso familiar total, es decir, a un monto mayor que el ingreso agregado del 70% de la población mexicana.

Además, el modelo neoliberal ha resultado también marcadamente excluyente para la mayoría del empresariado mexicano. *Primero*, porque las privatizaciones y las políticas preferenciales de precios relativos provocaron una redistribución de la riqueza y del ingreso empresarial en favor de grupos oligopólicos, creando rentas extraordinarias de monopolio u oligopolio. *Segundo*, porque las políticas de estabilización y ajuste estructural beneficiaron a un reducido grupo de empresas e impactaron adversamente a la mayoría, afectando ramas completas de la industria y de la producción primaria, cuya crisis es tan severa que su producción es aún ahora inferior a la de 1981. *Tercero*, porque la liberalización de los mercados financieros desencadenó una febril especulación bursátil y financiera que ha enriquecido a unos cuantos. Sólo 27 hombres de negocios controlan riquezas equivalentes al 28.5% del PIB nacional de 1992. De esta manera, como contraparte de la pauperización de las mayorías nacionales y de la ruina y penuria de numerosos empresarios, se produjo una hiperconcentración del ingreso y la riqueza en favor de una reducida élite de hombres de negocios, favorecidos en general por el modelo económico neoliberal.

La pauperización y el sufrimiento de las mayorías nacionales y la hiperconcentración de la riqueza son efectos inevitables tanto del libre accionar de la mano invisible del mercado como de las políticas neoconservadoras que deliberadamente los han provocado, mediante topes salariales, reducción de precios rurales de garantía, modificación de precios relativos en favor de grupos monopólicos, etc., que no sólo empobrecen a las mayorías nacionales, sino que al contraer la demanda agregada de éstas, actúan como una de las causas del estancamiento productivo, al desestimular la producción nacional de satisfactores, la inversión productiva y el empleo.

Por ello, la dinamización y el crecimiento sostenido de la economía nacional, y la superación de las desigualdades en el desarrollo de los sectores y ramas de la producción, presuponen un mejoramiento sustantivo de la distribución del ingreso, condición de la expansión del mercado interno y del círculo virtuoso del crecimiento de la producción, la inversión, el empleo y el ingreso.

Además, la elevación de los niveles de bienestar es fin esencial de toda cartera política económica. Es inadmisibles el sacrificio de las generaciones presentes en aras de un *paraíso neoliberal* que advendrá en un futuro remoto e indefinido, es decir, de una utopía neoliberal tan incierta como la utopía comunista.

Funciones del Estado en el desarrollo económico y social

A partir de 1983, la estrategia económica neoliberal -sustentada en la ideología ortodoxa que atribuye a la intervención del Estado la causa de todos los males económicos- se orientó a restaurar el papel del mercado como mecanismo casi exclusivo de asignación óptima de recursos, maximizador de la producción y del empleo, corrector automático de eventuales desajustes económicos, y garante de la inversión productiva y el desarrollo económico, transfiriendo a los agentes privados, gradual pero sostenidamente, las funciones económicas.

A diez años de aplicación de la estrategia neoliberal, con más mercado y menos Estado, la economía mexicana se caracteriza por su alta vulnerabilidad externa, por el desplome de los coeficientes de ahorro y ahorro/inversión, por la profundización de la inequidad en la distribución del ingreso, por el crecimiento vertical del desempleo, por la acumulación de rezagos que profundizan la desarticulación interna y la desigualdad en el desarrollo de la planta productiva, por la insuficiencia y deterioro de la infraestructura, por la degradación de los sistemas educativos y asistenciales, por el incremento de la desnutrición infantil severa y de la pobreza y, en suma, por el deterioro de los niveles de bienestar y las condiciones productivas del país. En cambio, han aumentado la concentración del ingreso y la riqueza nacional en pocas manos y la dependencia financiera externa.

Los desequilibrios internos y externos *que el mercado ha sido incapaz de corregir*, hacen necesario reconsiderar las funciones que el Estado debe asumir en el desarrollo económico y en la promoción del bienestar social. No se trata de volver a un Estado grande; se trata de que el Estado no eluda, sino

asuma sus funciones en el desarrollo económico y social, elevando la calidad de su presencia en la vida nacional.

"En los mercados existen numerosas imperfecciones que impiden la eficiente utilización de los factores y la equitativa distribución del producto" (Emilio Sacristán). "El estado tendrá que replantear su acción frente a los grupos hegemónicos nacionales. El Estado requiere ser el centro generador del desarrollo económico, reconociendo los límites de la oligopolización en la distribución del ingreso y la creación de empleos" (Elia Marun). "Todas las evidencias históricas apuntan en el sentido de que la única opción de política social capaz de hacer frente a la problemática social de una nación sumida mayoritariamente en la pobreza, como el caso de México, es aquella que fortalece y expande la acción pública y prioriza la canalización de recursos al ámbito social" (Cristina Laurell).

La armonización de los intereses de las mayorías nacionales de empresarios, trabajadores urbanos y hombres del campo a través de su participación efectiva en las decisiones de política económica, a fin que el Estado sea el instrumento de la sociedad para salvaguardar y promover los intereses comunes de la nación, hace necesaria la *modernización política* o democratización del Estado.

Formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico y productividad

La productividad y el crecimiento de la riqueza de las naciones están determinados fundamentalmente por el desarrollo de las aptitudes físicas e intelectuales de sus ciudadanos; la "inversión" en alimentación, salud, educación, capacitación laboral, desarrollo científico y tecnológico, constituye la más fructífera asignación de recursos que las naciones pueden hacer para la construcción de su futuro.

No obstante, las políticas neoliberales de ajuste económico y estabilización aplicadas desde 1983 han impactado adversamente la formación de recursos humanos al degradar el ingreso de las mayorías nacionales y reducir el gasto social *per capita*, afectando los sistemas

educativos, la investigación científico-técnica y la base biológica (nutrimental y de salud) de los recursos humanos en los estratos de bajos ingresos.

En la educación, "el modelo neoliberal ignora los rezagos sociales y acentúa la polaridad al reducir el gasto público y transferir responsabilidades a instituciones educativas privadas" (Leonel Corona).

La polarización educativa debe superarse elevando la calidad de educación básica, estableciendo una auditoría social sobre la educación; y redistribuyendo los recursos educativos en favor de los que menos tienen. Por consiguiente, debe "mantenerse la gratuidad de la educación pública a todos los niveles" (Muñoz Izquierdo); y, además, debe establecerse un sistema de becas para el sostenimiento de estudiantes de escasos recursos. "Las cuotas que podrían pagar las familias de mayores recursos deben sustituirse por un sistema de impuestos progresivos" (Muñoz Izquierdo). Como fuente adicional de financiamiento se debe promover la obtención, por las instituciones educativas, de ingresos propios mediante actividades comercializables diversas.

México necesita aumentar su competitividad a través de la aplicación de nuevas tecnologías. Sin embargo, nuestro rezago en investigación y desarrollo es enorme y se ha agravado por las políticas neoliberales. Actualmente México destina 0.3% del PIB a la investigación tecnológica, mientras Estados Unidos 2.8% de su PIB (lo cual significa que invierten cerca de 70 veces más que México en ID).

Ante esta desigualdad suele proponerse que los países atrasados pueden comprar tecnologías como una alternativa para mejorar su capacidad competitiva. Sin embargo, "la oferta de tecnología se ve afectada por la protección legal y, en mayor medida, por los secretos comerciales. Además [...] la Empresa Multinacional (EM) explota los conocimientos [cuando la tecnología se encuentra en su fase innovativa ascendente], fabricando y vendiendo el producto. Cuando la tecnología está en su fase madura, a la EM le conviene transferir la producción a sus filiales en otros países (o bien establecer coinversiones). Apenas cuando la tecnología entre en su fase de declinación y los márgenes de utilidad son cada vez más bajos, la EM decidirá transferir la tecnología a otra empresa" (José Luis Solleiro).

El capítulo de tecnología fue muy mal negociado en el TLCN. "Es muy

difícil predecir qué pasará exactamente [al aplicarse el TLCN], pero en un ambiente de alto proteccionismo tecnológico, puede afirmarse que sólo si existe la posibilidad de hacer buenos negocios [en México], la tecnología fluirá". En general, "México no puede creer que podrá ir de compras a los supermercados de tecnología de los países industrializados. Todo lo contrario, dadas las barreras de entrada a la tecnología, la posibilidad de acceso a los grandes avances y las tecnologías de punta dependerá en gran medida del nivel de conocimiento científico y tecnológico endógeno y no solamente de un determinado marco legal". Por ello, "es necesario subrayar la necesidad de contar en el país con una verdadera política de innovación entendida como el proceso de toma de decisiones estratégicas que orienten las actividades de selección, adaptación, asimilación y creación de tecnología hacia los objetivos de carácter superior en una nación" (José Luis Solleiro).

La capacitación en el trabajo y para el trabajo no es un problema exclusivo de los trabajadores; debe reconocerse como un problema básico y fundamental de la empresa (Mónica Casalet). La calificación laboral requiere una nueva política de gestión para el desarrollo tecnológico. Es necesario además crear redes industriales, educativas y de investigación científico-técnica, para vincular las necesidades específicas de la industria con la formación profesional y la innovación tecnológica.

Una estrategia alternativa de desarrollo económico debe encaminarse a "la creación de una *democracia de productores*, que coloque en el centro de sus preocupaciones la *cultura de la producción*" (Edur Velasco). La alternativa requiere un esquema institucional que ponga en manos de los trabajadores la posibilidad de participar en la organización de la producción y de compartir los beneficios de la elevación de la productividad. Ello implica un cambio en la actitud de los empresarios (y no sólo de los trabajadores) para dar paso a relación de cooperación en interés común.

Para generalizar una nueva cultura laboral y de gestión del proceso productivo, capaz de elevar sostenidamente la productividad y compartir sus beneficios, se requieren organizaciones empresariales *autónomas* y *representativas*, así como sindicatos *autónomos* y *representativos*, eliminando de la discrecionalidad de la participación del Estado en el ámbito laboral. Pero esto supone "la transformación del sistema político que sostiene el

autoritarismo y la discrecionalidad del Estado" (Graciela Bensusán).

Infraestructura

Las políticas contraccionistas y de adelgazamiento del Estado han afectado gravemente el desarrollo de la infraestructura económica y social. La reducción de la *inversión pública* federal en comunicaciones y transportes (-35.6% ente 1982 y 1991), en infraestructura urbana (-61.5%), en infraestructura de salud (-31.5%) y en infraestructura social en general (-37.5%), no sólo han acentuado los rezagos acumulados, sino que han implicado el deterioro de la infraestructura previamente construida por la insuficiencia de las inversiones en conservación o mantenimiento.

Por ejemplo, mientras en el período 1971-1981 la longitud de la red carretera se incrementó 188%, entre 1981 y 1991 sólo creció 13.5%; y las carreteras federales y estatales, que se habían extendido 39% en el primer período, sólo se ampliaron 12% en el segundo período. Además, el severo recorte presupuestal en inversiones de conservación o mantenimiento (-63% entre 1981 y 1991) deterioró seriamente la infraestructura carretera. De acuerdo con una evaluación física realizada en 1992 por una sociedad francesa de ingeniería, el 60% de la red carretera federal se encuentra en pésimas condiciones, estimación que coincide con la de expertos de la SCT, quienes estiman que sólo el 30% de las carreteras están en condiciones regulares y apenas el 10% se halla en buen estado.

La infraestructura ferroviaria presenta serios rezagos en instalaciones de carga y descarga, puentes, terminales y almacenes. La infraestructura para el transporte marítimo se encuentra prácticamente estancada: mientras entre 1971 y 1981, el número de puertos aumentó de 38 a 75, para 1991 sólo creció a 76; la longitud de muelles que entre 1971 y 1981 había crecido 33%, sólo creció 18% entre 1981 y 1991; y el área de patios que aumentó 118% en el primer período, sólo aumentó 19% en el segundo período.

La infraestructura de telecomunicaciones presenta también rezagos agudizados por la desaceleración en su ritmo de crecimiento. La longitud de cables portadores que aumentó 63% entre 1971 y 1981, sólo aumentó 15%

entre 1981 y 1991; los canales de telégrafo que crecieron 226% en el primer período, sólo aumentaron 41% en el segundo; las líneas telefónicas, que se incrementaron 205% entre 1971 y 1981, aumentaron 103% entre 1981 y 1991; las líneas de telex, que aumentaron 208% en el primer lapso, sólo crecieron 53% en el segundo, etc.

Finalmente, la severa contracción del gasto público federal en desarrollo urbano (sin incluir al DDF, el gasto federal declinó de 49.2 miles de millones de pesos en 1981 -a precios de 1980- a 15.2 miles de millones de 1991) y de la inversión pública federal en este rubro (incluyendo el DDF, la inversión bajó de 88.6 miles de millones de pesos en 1982 a 35.0 miles de millones en 1991) agravó los rezagos en infraestructura urbana.

Un modelo alternativo de desarrollo económico con equidad deberá reconstruir y ampliar la infraestructura económica y social.

Desarrollo regional y urbano

Tradicionalmente el desarrollo económico en México ha estado caracterizado por marcadas desigualdades en el crecimiento económico regional y por la marginación de una gran proporción de la población. Estas disparidades en el desarrollo tienen su principal causa en la ausencia de una *política integral de desarrollo regional* que corrija las consecuencias espaciales y de distribución del ingreso ocasionadas por el mercado.

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica puede ahondar estas desigualdades, al priorizar las regiones con mayores posibilidades de competencia externa, descuidando las regiones más desfavorecidas y fortaleciendo las tendencias a la fragmentación y desintegración nacional, ampliando las brechas entre regiones marginales y "prósperas".

La experiencia de la Comunidad Económica Europea debe tenerse en consideración al formular una *política alternativa de desarrollo regional*. Aunque se admitió que la integración no necesariamente supondría un desarrollo equilibrado entre las diferentes regiones europeas, sí se formaron organismos especializados para el diseño y ejecución de una política encaminada a atemperar las desigualdades regionales. El rasgo esencial de la

política regional de la CEE, es precisamente la subordinación de ciertos objetivos de eficiencia económica a otros de carácter más social, como el mantenimiento del empleo y la ayuda a zonas subdesarrolladas.

Bajo cualquier escenario, el país requiere una política de desarrollo regional asentada en un verdadero federalismo, que corrija las profundas desigualdades en la distribución del ingreso, elevando el nivel de bienestar de las poblaciones marginadas. Eliminar la tendencia centralista del desarrollo en México requiere una redefinición del pacto federal que establezca nuevas reglas de redistribución del presupuesto público, que no privilegie sólo algunas regiones del país y, sobre todo, que no deje a la mano invisible del mercado el desarrollo de las regiones rezagadas. Se requiere una democratización del espacio territorial, que implica ejercicio pleno de la representación y de la participación ciudadana, mediante la supresión de cualquier forma de corporativización.

Hacia un desarrollo ambientalmente sustentable

La degradación ambiental en México es una realidad cuyas expresiones se encuentran en todas las regiones; sus niveles han alcanzado signos de gravedad en numerosas áreas, afectando las potencialidades del desarrollo económico nacional y la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos.

Si bien la degradación ambiental se origina en el modelo de industrialización precedente, el neoliberalismo económico ha sido no sólo incapaz de contenerla, sino que la ha agravado mediante el impulso a la industria maquiladora generadora de emisiones tóxicas y residuos sólidos peligrosos; la admisión creciente de desechos químicos y radiactivos procedentes de Estados Unidos, que han convertido a nuestro país en basurero de materiales dañinos; y el relajamiento en el cumplimiento de las normas ambientales, tanto por la restricción del gasto en control ambiental, como por la proliferación de la tolerancia y corrupción.

La asignación de recursos por la mano invisible del mercado tiende de manera natural a la mayor ganancia en el menor tiempo y, por tanto, a

disminuir los *costos privados* de producción sin considerar los *costos sociales*: ambientales y biológicos.

Por eso, a pesar de que la ecología es tema relevante en la política nacional y en la vida cotidiana, las estrategias ambientalistas son aún incipientes. Es cierto que los gobiernos locales están empezando a incorporar lo ambiental en sus programas, pero carecen de recursos para realizar proyectos eficaces; y los presupuestos que el gobierno federal destina a la restauración, preservación y vigilancia ecológica, son insuficientes frente a la magnitud del problema, amén de que las estructuras administrativas y la normatividad no propician una respuesta adecuada para frenar o siquiera aminorar el deterioro.

En un modelo alternativo de desarrollo económico, la preservación y restauración del ambiente es parámetro y objetivo esencial: lograr un crecimiento económico que conserve y enriquezca, en vez de destruir, las bases naturales en las que inevitablemente se asienta la actividad humana; regular los procesos productivos y de consumo, introduciendo incentivos para utilizar mejor los recursos, minimizar impactos ambientales y restaurar ecosistemas; diseñar e instrumentar políticas que incluyan, entre sus criterios de eficiencia económica, la eficiencia en el uso, preservación y restauración de los recursos naturales; y que consideren congruentemente la *sustentabilidad ambiental* como elemento nodal del verdadero desarrollo económico, que incluye la superación de la pobreza y la equidad en la distribución del ingreso.

POLITICAS SECTORIALES

La penuria microeconómica de la abrumadora mayoría de los mexicanos: empresarios, obreros asalariados, campesinos y clases medias, no es sino un efecto de las *políticas macroeconómicas* neoliberales.

No existe una pared de alto vacío entre los fenómenos macroeconómicos y los microeconómicos. Si las microeconomías no van bien es porque la macroeconomía tampoco va bien.

Son las políticas macroeconómicas las que en primer término han

hundido a la mayor parte de nuestro aparato productivo: la *política comercial*, que obliga al productor nacional a competir en condiciones de desventaja por las asimetrías estructurales; la *política cambiaria*, que remata en la sobrevaluación del peso y ahonda esta desventaja; y la política crediticia, que eleva las tasas reales de interés, y es la puntilla que arruina a pequeños, medianos y grandes productores.

Además, el modelo neoliberal que convierte en herejía la intervención del Estado en la economía, ha dismantelado las políticas de fomento sectoriales (dejando que cada uno se las arregle por su cuenta con "la mano invisible del mercado") y ha provocado el deterioro y la mayor acumulación de rezagos en áreas de desarrollo general: infraestructura, formación de recursos humanos, desarrollo regional y urbano, etc.

Sector agropecuario forestal y pesquero.

Situación y alternativas

Las políticas de ajuste económico y estabilización afectaron de un modo particularmente severo al sector agropecuario, forestal y pesquero. La producción agrícola (PIB) *per cápita* resultó en 1992 inferior en 19.4% a la de 1981; la producción pecuaria declinó 14.9% y la producción forestal en 19.5%. Además, el tonelaje de la captura pesquera sufrió un descenso *per cápita* del 31.6%. Como resultado, las importaciones de alimentos se dispararon de 1,429 millones de dólares en 1986 a 4,750 millones en 1990, y a 6,098 millones de dólares en 1992.

La causa del desastre sectorial radica en los principios e instrumentos básicos del modelo neoliberal mexicano: a) la apertura comercial y la política cambiaria, que han hecho descender los precios reales de numerosos productos y la rentabilidad agregada del sector, provocando la descapitalización (disminuyen el parque de tractores y maquinaria, las embarcaciones pesqueras, los hatos ganaderos y el empleo de insumos modernos); b) las políticas monetarias y crediticias que provocaron primero el escaseamiento y después el encarecimiento del crédito; c) el achicamiento del Estado, que hizo descender la inversión pública en infraestructura rural al

23.9% de la inversión ejercida en 1981, así como el gasto global en fomento agropecuario y forestal (en investigación, etc., al 28.6% del ejercido en 1981) y recortó severamente el gasto en fomento pesquero a sólo el 9% del ejercido en 1981. De esta manera, las desastrosas políticas macroeconómicas y sectoriales provocaron lo que tenían que provocar: el desastre del sector.

La estrategia neoliberal, que remata en el proyectado Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ha comprometido la liberalización completa de nuestro comercio agropecuario y forestal con las potencias agrícolas del Norte, bajo condiciones en que las profundas asimetrías que existen entre nuestros países (en desarrollo tecnológico, provisión de recursos naturales, políticas agrícolas y estructura social) producirán efectos devastadores en el campo mexicano, provocando el éxodo de más de tres millones de familias campesinas.

De este modo, la estrategia neoliberal ha sido y será marcadamente excluyente del sector agropecuario y forestal, de los campesinos y empresarios agrícolas y de la mayoría de los pescadores ("80% de los cuales están por debajo de la línea de la pobreza" (Villamar).

Es necesario rescatar el sector agropecuario, forestal y pesquero, reconociendo el papel relevante que el sector puede desempeñar en el futuro de la economía mexicana bajo un proyecto alternativo de desarrollo. Durante los próximos lustros, de reconstrucción de la economía nacional, el sector agropecuario podría desempeñar las siguientes funciones principales: 1) proveer los alimentos y las materias primas que el país demanda, a fin de apoyar la *estabilidad económica* interna y el *equilibrio de las cuentas externas*: esto significa recuperar la autosuficiencia alimentaria y la provisión nacional de materias primas agrícolas para la industria; 2) generar excedentes exportables en magnitud considerable en aquellos cultivos de alta densidad económica en los cuales México tiene ya un lugar ganado en el mercado mundial (no necesariamente estadounidenses, puesto que existe potencial de diversificación); 3) preservar en el corto y mediano plazos, sin demérito del necesario cambio tecnológico, el mayor volumen posible de empleos rurales a fin de aligerar las presiones sobre el mercado de trabajo urbano (en un país que prácticamente no creó empleos formales durante los años ochenta); 4) proporcionar un mercado interno dinámico para la industria nacional

productora de bienes de consumo, de insumos y bienes de capital; 5) transferir a las actividades no agrícolas los capitales excedentes acumulados como producto de rentas diferenciales apropiadas por los empresarios agrícolas más tecnificados.

El país requiere, por tanto, un programa integral de fomento agropecuario forestal y pesquero de corto, mediano y largo plazos, que atienda la infraestructura y el desarrollo científico-técnico, fomente el extensionismo, establezca condiciones preferenciales de crédito y seguro, facilite el acceso a los equipos e insumos tecnológicos, regule mercados estabilizando precios que otorguen a los productores márgenes de rentabilidad adecuados para capitalizarse y tecnificarse. Un programa de esta naturaleza costará sin duda a la sociedad recursos del presente (menos, desde luego, de lo que cuestan las compras de comida en el exterior) pero sus resultados se disfrutarán años después en forma de comida barata producida en el país, de equilibrio de las cuentas externas, de armonía en el patrón de desarrollo económico, de equilibrio social, de seguridad alimentaria y de afianzamiento de la soberanía nacional.

Industria manufacturera. Situación y desarrollo de un modelo alternativo

La estrategia neoliberal arrancó del diagnóstico de que el endeudamiento externo fue provocado por las características del proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones, que hizo surgir una planta fabril ineficiente, poco articulada en su interior e incapaz de cubrir con sus exportaciones el importe de sus bienes de capital e insumos importados. En consecuencia, la nueva estrategia se propuso elevar la eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones manufactureras, a fin de generar divisas suficientes para autofinanciar el desarrollo industrial, superando de este modo la necesidad permanente de financiamiento externo.

El *instrumento fundamental* de esta estrategia industrial ha sido la *apertura comercial* (operativizada desde mediados de los ochenta y precipitada a partir de diciembre de 1987 mediante el PSE), para presionar a

la industria nacional a elevar su eficiencia competitiva, otorgándole a la vez un acceso fácil a la importación de insumos, bienes de capital y tecnología requeridos para la modernización productiva.

Los resultados de esta estrategia han sido diferentes de los esperados. La precipitada apertura comercial -que la política estabilizadora hizo acompañar, a partir del PSE, de la fijación o casi fijación del tipo de cambio, que ha rematado en la progresiva sobrevaluación de nuestra moneda- en vez de superar la necesidad de financiamiento exterior, hizo crecer hasta dimensiones sin precedentes tanto el *déficit comercial* como la dependencia del ahorro externo para equilibrar la balanza de pagos. En 1992, las importaciones manufactureras superaron en 34,523 millones de dólares a las exportaciones manufactureras, mientras que en 1987 el déficit manufacturero fue apenas de 1,355 millones de dólares y en 1981 de 17,939, el más alto en la historia anterior a la crisis de la deuda. Además, el aumento de las exportaciones manufactureras presentado por la estrategia neoliberal como su carta triunfo (falsamente, puesto que entre 1965 y 1981 las exportaciones manufactureras, en dólares constantes de 1980, crecieron a una tasa media del 14.0% anual, mientras que en el período 1982-1992 su tasa de crecimiento real fue del 12% anual), agudizó, en vez de superar, la desarticulación interna y la desigualdad en el desarrollo de las ramas fabriles, al crecer vertiginosamente el componente importado de las exportaciones manufactureras (desplazando componentes nacionales), y al concentrarse las exportaciones en unas cuantas ramas industriales, productos y empresas¹. En estas condiciones, no es casual que la más importante industria de exportación, la automotriz, sea también la principal causante del déficit comercial manufacturero, lo que indica que sus exportaciones, lejos de ejercer un efecto de arrastre sobre la industria nacional, transmiten sus efectos multiplicadores sobre la producción, la inversión y el empleo fuera del país.

Mientras tanto, numerosas industrias que producen para el mercado interno han visto seriamente deterioradas sus posibilidades de acumulación, tecnificación y expansión y, en algunos casos, incluso de simple

¹ Sólo tres divisiones industriales concentran el 80% de las exportaciones: productos metálicos, maquinaria y equipo (53%); química (17%) y alimentos (10%); y dentro de estas divisiones, sólo 22 empresas generan el 42% de las ventas externas de manufacturas.

sobrevivencia, al enfrentar la concurrencia de mercancías importadas ante las cuales están en desventaja por las diferencias estructurales y la brecha en tasas de interés, en tipo de cambio, en infraestructura y en políticas industriales. Como resultado, 16 de 48 ramas industriales, que emplean al 36% de los obreros manufactureros y generan el 25% de la producción manufacturera, tienen actualmente un volumen de producción inferior al alcanzado en 1981. De este modo, se han ahondado, en vez de superarse, los desequilibrios en el patrón de crecimiento económico. Se requiere, por tanto, una nueva *política industrial* con visión de largo plazo.

Bajo el actual escenario macroeconómico de desbalance comercial (provocado por apertura comercial unilateral y abrupta que remata en el TLC neoliberal), el tipo de cambio sobrevaluado y las elevadas tasas reales de interés, la mayor parte de la planta industrial mexicana está siendo condenada a la acumulación de cartas vencidas, a las quiebras masivas y a su desplazamiento por los grandes corporativos trasnacionales.

Por tanto, la *nueva política industrial* deberá, en primer término, *instrumentar políticas macroeconómicas que favorezcan el desarrollo manufacturero*: política de comercio exterior que combine fomento de las exportaciones con sustitución de importaciones, política cambiaria competitiva y política crediticia que fomente la inversión *productiva*.

La *nueva política industrial* debe fomentar el desarrollo endógeno sobre un horizonte de planeación de largo plazo, mediante acciones de fomento general y sectorial que desarrollen recursos humanos, investigación científico-técnica, extensionismo industrial e infraestructura; que reorienten el funcionamiento del sector financiero en favor de la producción, promuevan la articulación interna del aparato productivo y prioricen tanto industrias estratégicas como ramas productivas con alto efecto multiplicador sobre la producción, el empleo, el ingreso y la inversión.

La cooperación entre empresarios y trabajadores para elevar la productividad y compartir sus beneficios, la atención preferente a la pequeña y mediana industria, la restauración y preservación del ambiente, son también instrumentos y objetivos de una nueva política industrial.

En particular, la industria maquiladora debe ser redefinida en favor del desarrollo nacional. La experiencia de Corea del Sur es referente para imponer

a la empresa maquiladora compromisos de transferencia tecnológica, de apoyo a la pequeña empresa mexicana mediante redes de subconcentración, de incorporación progresiva de componentes nacionales en sus productos finales y, desde luego, de preservación ambiental y equidad laboral.

Industria energética. Situación y desarrollo de un modelo alternativo

La industria energética, eslabón esencial en la cadena productiva y pilar del desarrollo económico de México, se ha visto seriamente afectada por las políticas contractivas y de adelgazamiento del Estado, que han obstruido la expansión y modernización tecnológica de la industria energética, al reducir drásticamente sus fondos de inversión.

La industria petrolera ha sido sometida a una exacción desmedida por el fisco: mientras en el período 1976-1981 los ingresos petroleros representaron el 20.4% de los ingresos presupuestales del gobierno federal (IPGF), en el período 1983-1992 representaron 36.1% de los IPGF; y aún en el período 1988-1992, con precios internacionales abatidos para el crudo, los ingresos petroleros representaron el 27.6% de los IPGF. De esta manera, se han cercenado las perspectivas de expansión de la capacidad instalada y de modernización tecnológica de la industria petrolera: mientras las exacciones de PEMEX por el gobierno federal aumentaron de 146 mil millones de pesos anuales (a precios de 1980) en el período 1976-1981 (y de 200.4 mmdp en 1981) a 322.3 miles de millones anuales en el período 1983-1991 (con 269.6 miles de millones en 1991); el gasto ejercido por PEMEX disminuyó de 330.4 miles de millones de pesos en 1981 (a precios de 1980), a sólo 128.9 miles de millones en 1991. Como resultado, la perforación de los pozos (en exploración y en desarrollo) disminuyó de 1,261 km en 1981 a 175 km en 1992; las reservas nacionales probadas de crudo declinaron de 72,008 millones de barriles en 1982, a 65,000 millones en 1991; la capacidad instalada de refinación, que se había incrementado 138.5% en el período 1973-1982, apenas se incrementó 20% en el período 1983-1992; la capacidad instalada de la industria petroquímica, que había aumentado 396% en el primer período, sólo aumentó 34% en el lapso 1983-1992.

La industria eléctrica se ha visto también afectada por las políticas contractivas y de adelgazamiento del Estado. La inversión pública en electricidad decreció de 68,409 millones en 1981 (a precios de 1980) a sólo 35,510 millones en 1992 (mientras que entre 1970 y 1981 la inversión se incrementó 219%). Como resultado, la capacidad instalada en generación

pública de electricidad, que había aumentado 187% entre 1971 y 1981, sólo aumentó 58% entre 1982 y 1992.

La determinación de las funciones de la industria energética en un modelo alternativo de desarrollo económico, así como los instrumentos esenciales de política energética, deben considerar un horizonte de planeación de largo plazo. La preservación de la propiedad, explotación y comercialización de los recursos energéticos no renovables por el Estado, no sólo es pilar de la soberanía esencial sino principio medular para encauzar el desarrollo de la industria energética en función de su papel esencial en la industrialización y el desarrollo económico nacional.

Además, se requiere desarrollar la oferta de energéticos otorgando mayor énfasis a los recursos renovables y promover el ahorro y el uso eficiente de la energía, así como internalizar los costos ambientales del uso de las diversas fuentes de energía.

Un modelo alternativo de desarrollo económico debe otorgar plena autonomía de gestión administrativa y financiera a las empresas energéticas públicas. Su regulación debe ser establecida mediante contratos que estipulen sus planes de largo plazo, atendiendo a los intereses del desarrollo general. La descapitalización y asfixia financiera de las empresas energéticas debe ser superada, evitando su exacción desmedida por el fisco y permitiendo la adecuación de sus tarifas a sus costos (los subsidios a los consumidores industriales o residenciales debe pagarlos el Estado). Su tributación debe realizarse mediante una tasa sobre sus utilidades brutas (y no, como ahora ocurre con PEMEX, con un porcentaje fijo de sus ventas); las utilidades netas, después de cubrir sus requerimientos de inversión, deben entregarse al Estado.

No existe evidencia empírica de que las empresas eléctricas privadas sean más eficientes que las públicas. En cambio, existen riesgos en su privatización: dificultades de planeación a largo plazo, deterioro de la calidad del servicio, peligro de elevación desmedida del precio del fluido eléctrico por constituir monopolios regionales.

Industria de la construcción Situación y alternativas

La industria de la construcción, termómetro de cualquier economía, refleja los efectos brutalmente contractivos de las políticas de ajuste y estabilización. A diez años del experimento neoliberal de México, la industria de la construcción no sólo no ha crecido sino que su producto interno bruto es inferior al de 1981, mientras que en la década precedente el PIB de la

construcción creció 136.4%.

Las políticas de austeridad, al contraer severamente la inversión pública (menos 53% entre 1982 y 1991) en infraestructura carretera, hidráulica, etc., impactaron de manera directa a la industria de la construcción.

Un modelo alternativo de desarrollo económico impulsará fuertemente el crecimiento de la industria de la construcción. Extender y reconstruir la infraestructura de transporte, hidroagrícola, industrial, urbana; superar los rezagos agravados por el modelo neoliberal en viviendas, escuelas, hospitales, etc., es prioridad nacional.

Facilitar el desarrollo de la industria de la construcción mediante bancos de proyectos definidos a largo plazo en las diversas áreas de interés público; maximizar la redituabilidad social de la inversión pública atendiendo proyectos prioritarios en vez de proyectos simplemente espectaculares; regionalizar el gasto público en infraestructura, mediante un verdadero federalismo de las decisiones de inversión; reorientar recursos financieros en favor de la construcción pública y privada; promover la integración horizontal de las empresas pequeñas, medianas y grandes; incorporar a los procesos productivos tecnología ecológica de punta, son elementos de una política alternativa para el desarrollo de la industria de la construcción.

Minería. Situación y alternativas

La industria minera, en contraste con el incremento logrado entre 1971 y 1981 que fue de 170.2% (con una tasa anual media de 10.4% a precios de 1980), apenas alcanzó un crecimiento de 4.8% entre 1982 y 1991 (con una tasa anual de 0.5%).

La evolución de la minería bajo el modelo neoliberal refleja en general el carácter excluyente del modelo respecto a la mayoría de los mexicanos. Expuestas a los precios internacionales, numerosas empresas mineras medianas y pequeñas desaparecen ("23% de las empresas registradas en 1983 habían desaparecido en 1989": Miguel Angel Ramírez) o sobreviven en condiciones de penuria; desaparecen los programas de fomento minero, se reducen los créditos y se desmantelan los servicios de maquila estatal para pequeños mineros; disminuyen los puestos de trabajo (el Sindicato Minero perdió más de 30,000 plazas: Ramírez), se degradan los salarios y proliferan los pueblos fantasmas. En el polo opuesto, unas cuantas empresas gigantes con alto nivel tecnológico y asociadas a empresas extranjeras se desarrollan con éxito.

Una estrategia económica alternativa *incluyente de la mayoría de los mexicanos* debe fomentar el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa

minera. La promoción de figuras asociativas que operen beneficios de minerales, uniones de crédito y comercializadoras; la asistencia técnica con capital mixto para elevar la productividad de la pequeña y mediana empresa; la extensión y mejoramiento de la infraestructura; y la recuperación del crédito minero y su canalización a proyectos productivos viables, son algunos de los instrumentos factibles de fomento minero.

Sector financiero. Situación y reorientación en un modelo alternativo

La liberalización de los mercados financieros ha provocado una acelerada concentración de capitales en grupos oligopólicos, elevada especulación, excesivos márgenes de intermediación financiera y profundización de la segmentación de los mercados de capitales. Además, la política monetaria restrictiva y la necesidad de atraer y retener inversión extranjera en el mercado de dinero han incidido también sobre la elevación de las tasas reales de interés, ejerciendo una enorme presión sobre los costos financieros de las empresas, que ascienden hasta el 50% de costos totales en algunas ramas productivas.

La conformación de veinte poderosos grupos financieros que controlan recursos equivalentes a más de la mitad del producto nacional, mediante la integración de empresas bancarias, bursátiles, afianzadoras, aseguradoras, arrendadoras, empresas de factoraje y casas de cambio, *no ha ido acompañada de un incremento en la eficiencia en el manejo de los recursos*. Las ganancias de los bancos se han elevado enormemente, pero la presión que los acrecentados márgenes de intermediación y costos financieros ejercen sobre las empresas industriales, agrícolas y de servicios (unidos a la apertura comercial, a la sobrevaluación cambiaria y a las políticas contraccionistas) han provocado el crecimiento vertical de las carteras vencidas de los bancos. La elevación de la exposición interna de los bancos y el riesgo cambiario de sus acrecentadas deudas en moneda extranjera (más de veinte mil millones de dólares), gravitan sobre el sector financiero.

Así, la atracción y retención del ahorro externo mediante la elevación de las tasas internas de interés, la mantención a toda costa de la actual política cambiaria que sobrevalúa cada vez más nuestra moneda, y la aplicación de políticas recesivas para aligerar presiones sobre el sector externo, están sobrecalentando la caldera del sistema financiero mexicano.

Es necesario, por tanto, eliminar presiones sobre el sector financiero, regularlo y reorientarlo hacia la promoción de la inversión productiva. No es asunto crucial el régimen de propiedad de la banca, sino la rectoría del Estado

sobre el sistema financiero en función de los intereses generales del desarrollo nacional.

Con este objetivo, se requiere ampliar la banca de fomento, para la atención de áreas prioritarias, así como fortalecer y extender las uniones de crédito.

La liberalización de los mercados de capitales remata en la inclusión del sector financiero en el TLC de Norteamérica. No sólo se reduce así la soberanía en materia monetaria y crediticia, sino que se propicia la pérdida de control sobre nuestro excedente económico interno. Se procede así de manera inversa a las lecciones de países exitosos de industrialización reciente. La aplicación de la cláusula de escape o la renegociación del sector financiero en el TLCN son opciones y condiciones para la reorientación del sistema financiero hacia las prioridades del desarrollo nacional.

Servicios no financieros.

Situación y alternativas

Los severos programas de ajuste irradiaron también sus efectos, directa o indirectamente a los servicios no financieros, principalmente bajo la forma de estancamiento (el PIB del comercio, restaurantes y hoteles sólo creció 2.7% entre 1981 y 1991, contra una expansión del 134.7% entre 1971 y 1981) o desaceleración de su crecimiento (el PIB del transporte, comunicaciones y almacenamiento sólo creció 17.2% entre 1981 y 1991 contra 156.7% entre 1971 y 1981; y el PIB de servicios comunales y sociales: educación, servicios médicos, profesionales, etc., sólo se expandió 16.4% entre 1981 y 1991, contra 84.8% entre 1971 y 1981), lo cual hizo que los servicios no financieros por habitante resulten ahora inferiores a los existentes en 1981, por el crecimiento demográfico de 23% en ese lapso.

Los servicios turísticos, tradicionalmente considerados importante fuente de divisas para el país, han perdido dinamismo: y a causa de la sobrevaluación de nuestra moneda, están dejando de cumplir (como ocurrió también en los años 1980 y 1981, por la misma causa) su función de generadores *netos* de divisas para el financiamiento del desarrollo. Nuestra balanza turística global (incluyendo viajeros fronterizos), pasó de un superávit de 1,364 millones de dólares en 1979 (y 1,134 mdd en 1987) a un superávit de sólo 193 mdd en 1991. En conjunto, el producto interno bruto de los servicios turísticos se mantuvo prácticamente estancado, al crecer sólo 2% entre 1981 y 1991 (contra un crecimiento del 113% entre 1971 y 1981). La causa principal radica en la contracción del turismo nacional, derivada del desplome del poder adquisitivo de la población. En consecuencia, la inversión

turística decreció: mientras en 1981 se construyeron 15,244 cuartos nuevos, en 1991 sólo se añadieron 4,665 habitaciones.

El sector transporte presenta una notoria desaceleración respecto a las décadas anteriores. Entre 1971 y 1981, el número total de pasajeros movilizados aumentó 150%, mientras que entre 1982 y 1992 sólo aumentó 62%; y el transporte de carga (toneladas movilizadas) aumentó 107% entre 1971-1981 y sólo 17% entre 1982-1992. En particular, mientras el transporte ferroviario aumentó en 24,926 miles de toneladas la carga transportada en 1981 respecto a la de 1971; en 1992 tuvo un grave retroceso al disminuir la carga transportada en 16,622 miles toneladas respecto a 1982. El transporte marítimo movió, en 1981, 95,682 miles de toneladas más que en 1971; en contraste, en 1992 sólo movió 24,682 mil toneladas más que en 1982. El transporte aéreo aumentó su capacidad de carga 150% entre 1971 y 1981; y sólo 39% entre 1982 y 1992. Por último, el transporte carretero aumentó el número de pasajeros movilizados en 161% entre 1971 y 1981; y sólo en 64% entre 1982 y 1992.

Además, el transporte se ha encarecido por el incremento de precios de los combustibles, de los peajes y de las refacciones; y ha disminuido la calidad de su servicio por el insuficiente crecimiento de la infraestructura carretera, ferroviaria y marítima. Todo ello hace muy oneroso el servicio de transporte: "el 20% del costo de producción es por transporte, siendo 10% por mermas" (Víctor Islas).

Por ello, "el transporte no ha sido factor de impulso para la economía mexicana. En sus transacciones internacionales, México depende del servicio de transporte del comprador o vendedor del exterior. Así, el déficit externo promedio, en servicios de transporte en los últimos años, es de 3 mil millones de dólares" (Víctor Islas).

El sector de telecomunicaciones ha perdido también dinamismo respecto a las décadas anteriores. Por ejemplo, la longitud total de la red de corrientes portadoras de circuitos y cables para telecomunicaciones se incrementó 91% entre 1970 y 1981; mientras que entre 1981 y 1991 sólo aumentó 15%. Si bien las estaciones de radio y televisión han aumentado en los últimos diez años, se ha desarrollado vertiginosamente su concentración en grupos oligopólicos. En particular, el grupo TELEVISA gravita doblemente sobre la vida nacional; primero por las enormes rentas oligopólicas que han convertido a Emilio Azcárraga en uno de los hombres más ricos del mundo; segundo, porque sus abiertos vínculos con el poder político son factor obstructor de la democracia.

Teléfonos de México, que es la principal empresa de telecomunicaciones en el país y una de las 500 empresas más importantes del mundo, ha sido históricamente una empresa altamente rentable que arrojó

utilidades netas superiores a los 7 billones de pesos durante 1992. Su privatización, sin romper el monopolio, fue inmediatamente sucedida por la brusca elevación de sus tarifas, que gravita sobre el conjunto de la sociedad, permitiendo un jugoso negocio especulativo con sus acciones, que representan el 31% de la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, no ha mejorado la calidad del servicio ni se han superado los rezagos.

El comercio interior se encuentra estancado. Su producto interno bruto en 1990 fue inferior al de 1981 (-1.3%). Considerado anteriormente como una de las fuentes más importantes de ocupación formal en el país, su capacidad de creación de empleos disminuyó. Entre 1970 y 1980 se crearon 92 mil puestos de trabajo remunerados como promedio anual: entre 1981 y 1990 solamente se crearon 28 ocupaciones al año. En cambio, ha proliferado enormemente el comercio informal y se ha profundizado la diferenciación de los mercados de productos. "El comercio interior en México se caracteriza por su segmentación. Por una parte existe un sistema de abasto para clases medias y altas, muy eficiente, con tecnologías similares a las de los países desarrollados. En este segmento los grandes productores obtienen altos precios y los consumidores de altos ingresos consiguen precios bajos y competitivos. Además, se tiene un segmento donde venden los pequeños productores y compran los estratos de bajos ingresos y los consumidores de zonas rurales, caracterizado por bajos precios al productor y altos precios al consumidor" (Sodi).

Del análisis general de la evolución de los servicios no financieros en la última década se concluye, en suma, lo siguiente: "el modelo de desarrollo económico neoliberal ha desatendido el desarrollo de los servicios no financieros provocando serios desajustes en la estructura económica nacional" (Guillermo Ibarra).

Por ello, se requiere un programa de desarrollo estratégico de largo plazo de los servicios no financieros. La reconstrucción y ampliación de la infraestructura, la formación de recursos humanos, el impulso a la investigación científico-técnica, son acciones de interés general.

En particular, una alternativa para el comercio interno requiere "llenar los vacíos que dejó el retiro del gobierno como agente comercial, creando mercados de origen y programas de apoyo al pequeño productor" (Sodi). Sin embargo, sólo el crecimiento sostenido de la economía nacional permitirá la absorción del desempleo ahora encubierto en el comercio informal.

La reactivación del turismo requiere de un tipo de cambio competitivo, así como de la recuperación del poder adquisitivo de la población.

En telecomunicaciones es necesario democratizar a la economía, rompiendo el monopolismo de TELMEX y el oligopolio TELEVISA. En un modelo de desarrollo con equidad y democracia es necesario que la televisión

responda a las necesidades culturales, sociales y de democratización del país.

Reflexión final

La estrategia de desarrollo económico *incluyente de la mayoría de los mexicanos*, que se deriva de los análisis y discusiones realizadas en el Seminario, se sustenta en una evaluación rigurosamente objetiva de las realidades del México de hoy, así como del análisis realista de las restricciones y libertades que nuestro país tiene (bajo el actual entorno económico y político mundial) para diseñar, instrumentar y aplicar una estrategia propia de desarrollo económico, convenientemente integrada a los flujos internacionales de mercancías, capitales y tecnologías.

El modelo económico alternativo propuesto no representa una restauración del modelo que se colapsó en 1982. Volver a la estrategia económica que mostró su definitivo agotamiento con la crisis de la deuda de principios de los ochenta, no es objetivo viable ni deseable. No se postula un proteccionismo a ultranza, pero tampoco el aperturismo a ultranza, sino la racionalización de la apertura comercial haciéndola selectiva y gradual; no se postula un manejo fiscal irresponsable, pero se rechaza la perversidad del superávit fiscal; se reconoce la inequitativa distribución del ingreso en el modelo que se colapsó en 1982, pero se denuncia y rechaza el severo empeoramiento de su distribución y la hiperconcentración de la riqueza bajo el modelo neoliberal, proponiendo, en cambio, una verdadera modernización económica de México que debe comprender *la modernización de la distribución del ingreso*; no se postula un Estado grande, pero se rechaza un Estado que elude sus responsabilidades en la promoción del desarrollo económico y social, proponiéndose, en cambio, un Estado que asuma sus responsabilidades y eleve la *calidad* de su presencia en la vida nacional; se rechaza el corporativismo y el presidencialismo del modelo preneoliberal, pero también el reforzado corporativismo y presidencialismo neoliberal, y se postula la democracia de las instituciones y organizaciones sociales como la forma de vida de los mexicanos.

BIBLIOGRAFIA

Alvarez Alejandro, *Mercado y Estado. Ciclos del pensamiento y correlaciones de fuerzas sociales.*

Bensusán Graciela, *Estrategias de competitividad y relaciones laborales: ¿continuidad o cambio?*

Calderón Salazar Jorge, *Por una nueva política de ingreso y gasto público que impulse el desarrollo nacional.*

Castaingts Juan, *Inversión extranjera de cartera. Situación y Alternativas.*

Estrada José Luis, *Alternativas de desarrollo: modelos de industrialización y de comercio exterior en los Nic's asiáticos.*

Guerra Borges Alfredo, *Regionalización y bloques económicos. Tendencias desde una perspectiva latinoamericana.*

Guillén Arturo, *El proceso de privatización en México.*

Huerta Arturo, *Política de estabilización y crecimiento sostenido con distribución del ingreso: una propuesta para México.*

Ibarra Guillermo, *Los servicios; la cara desconocida de la economía mexicana.*

Islas Víctor, *El transporte en México. Situación actual y perspectivas ante el TLC.*

Laurell Cristina, *Regímenes de política social y satisfacción de necesidades sociales.*

Márquez Ayala David, *El tratado de libre comercio de Norteamérica ¿opción adecuada para México bajo su actual contenido?.*

- Marún Elia, *El estado como agente económico en México. Modalidades estratégicas y retos de su funcionamiento actual.*
- Ornelas Raúl, *Inversión extranjera directa y financiamiento del desarrollo en México. Situación y Alternativas.*
- Sacristán Emilio, *Alcances y límites del estado en el desarrollo económico.*
- Sodi de la Tijera Demetrio, *comercio interior en el módulo de servicios no financieros.*
- Solleiro José Luis, *El Tratado Trilateral de Libre Comercio y el desarrollo científico y tecnológico en México.*
- Velasco Edur, *"Determinantes estructurales de la productividad".*
- Vilas Carlos, *Estados Nacionales y mercados transnacionales en la búsqueda de un desarrollo alternativo.*
- Villamar Alejandro, *"Efectos sectoriales de las políticas neoliberales de ajuste económico. Situación y perspectivas del sector pesquero".*
- Zepeda Mario, *La estrategia del superávit cero dentro del actual modelo económico.*

ALTERNATIVAS PARA LA ECONOMIA MEXICANA

SINTESIS DE DIAGNOSTICOS Y PROPOSICIONES

SEMINARIO NACIONAL

Coordinador: José Luis Calva

Consejo Asesor: Jaime Aboites (UNAM-X), Adrián Guillermo Aguilar (UNAM), Carlos Alba (COLMEX), Alejandro Alvarez (UNAM), Jesús Arroyo Alejandre (U de G), David Barkin (UAM-X), León Bendeski (U. de las Américas), Julio Boltvinik (COLMEX), Josefina Callicó López (U de G), Mario Camberos (CIAD-Son), Wilfrido Campbell (UACJ), Juan Castaingts (UAM-I), Manuel Martín Castillo (UADY), Eugenia Correa (UNAM), Alejandro Covarrubias (COLSON), Federico Curiel (U de G), Leonardo Curzio (UNAM), Alejandro Dávila (COLEF), Gustavo del Castillo (COLEF), Daniel Dardón (UNACH), Mónica de la Garza (UAM-A), Sergio de la Peña (UNAM), Rodolfo de la Torre (ITAM), Abraham Díaz Rodríguez (UNAM), Juan Manuel Durán (U de G), Jaime Estay (UAP), Concepción Figueroa Souguet (U. La Salle), Gerardo Fujji (UNAM), Rodolfo García Zamora (UAZ), Manuel Angel Gómez Cruz (UACH), Gerardo Gómez (UACH), M. Antonio Guerra (UAS), Arturo Guillén (UAM-I), Antonio Gutiérrez (UNAM), Estela Gutiérrez (UANL), Carlos Heredia (ITAM), Enrique Hernández Laos (UAM-I), Guillermo E. Ibarra (UAS), Roberto Jiménez (UNISON), Rubén Lau (UACJ), Cristina Laurell (UAM-X), Rafael Landerreche (ITAM), Enrique Leff (PNUMA/ORPALC), Elaine Levine (UNAM), Lucrecia Lozano (ITESM), Roberto Michel (CP-CIDE), Jordy Micheli (CEPNA), Prudenciano Moreno (UPN), José María Muriá (COLJAL), Luis E. Muggenburg (ITESM), Enrique Mora (F. Ebert), Juan Manuel Navarro (IPN), Etelberto Ortíz (UAM-x), Juan José Palacios (U. de G), Betha Palomino (IPN), Florencio Posadas (UAS), Emilio Pradilla (UAM-X), Jaime Antonio Preciado (U de G), Efraín Peña (UAEM), Enrique Provencio (UNAM), Teresa Rendón (UNAM), Jesús Rivera (UAP), Virgilio Rivera Delgadillo (UAZ), Rubén Rocha Moya (UAS), Rita Schwentesius Rindermann (UACH), José Luis Solleiro (UNAM), Miguel A. Vázquez (UNISON), Edur Velasco (UNAM-A), Gregorio Vidal (UAM-I), Jacinto Viqueira (UNAM), Pablo Wong (CIAD-Son), Sergio Zendejas (Col.de Michoacán), Eduardo Zepeda (COLEF).

Secretaría Académica: Leticia Campos

Comisión Organizadora: Juan Arancibia, José Luis Calva, Leticia Campos, Alfredo Guerra-Borges, Raúl Ornelas, Saúl Osorio, Dinah Rodríguez, José Zaragoza, miembros del Area de Estudios Prospectivos de la Estructura Económica de México del IIEc-UNAM.

DIRECTORIO DE LA UACH

Ing. Carlos Orozco Alam	Rector
Ing. Ramés Salcedo Baca	Director Académico
Dr. Santos MartínezTenorio	Director de Administración
Ing. Juan Fco. Tah Iuit	Director de Patronato
Lic. Emilio López Gámez	Director de Difusión Cultural
Ing. Edgardo Escalante Rebolledo	Subdirector de Investigación
Dr. Manuel A. Gómez Cruz	Director del CIESTAAM

COMITE EDITORIAL DEL CIESTAAM

Dra. Rita S. Rindermann
Dr. Manuel A. Gómez Cruz
Dr. V. Horacio Santoyo Cortés
Ing. Manrrubio Muñoz Rodríguez
Ing. Claudio A. Flores Valdez
Dr. Miguel Angel Sámano Rentería

PUBLICACIONES DEL CIESTAAM

- LA AGROINDUSTRIA Y LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES EN MEXICO PROBLEMÁTICA, TENDENCIA Y ALTERNATIVAS DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA
- MEMORIAS DEL PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO (III TOMOS)
- MEMORIAS DEL SEGUNDO SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO (II TOMOS)
- LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA COMARCA LAGUNERA. 1960-1990
- EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA MEXICANA
- LA AGRICULTURA MEXICANA FRENTE AL TLC
- IMPLICACIONES DEL PROCESO TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA EN PAISES EN DESARROLLO
- LOS QUESOS MEXICANOS
- ORGANIZACION Y PRODUCCION EN EL PLAN CHONTALPA
- EL CAFE CEREZA EN MEXICO. TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION
- ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
- MEMORIAS DEL TERCER FORO DE INVESTIGACION Y SERVICIO DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTES DE INVESTIGACION

- 01 LA PORCICULTURA MEXICANA ANTE LA POSIBLE FIRMA DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EUA Y CANADA
- 02 EL CAFE EN LA PERSPECTIVA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
- 03 EL SISTEMA LECHE DE MEXICO EN EL MARCO DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO
- 04 LA PRODUCCION DE ARROZ EN TABASCO
- 05 ASOCIACION EN PARTICIPACION EN EL CAMPO MEXICANO
- 06 LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN MEXICO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON E U A Y CANADA
- 07 EL CONSUMO DE HORTALIZAS EN MEXICO
- 08 EL MERCADO DEL LIMON PERSA EN MEXICO
- 09 LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA MEXICANA ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
- 10 LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES EN EL SUR DE SONORA
- 11 PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL NOPAL
- 12 LA AGROINDUSTRIA CAÑERA EN MEXICO FRENTE A LA APERTURA COMERCIAL
- 13 EL CAFE EN MEXICO. ANTECEDENTES, ESTADISTICAS Y SITUACION TECNICA
- 14 LAS NEGOCIACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE MEXICO EN EL TLC
- 15 LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES MINIFUNDISTAS EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL ESTADO DE PUEBLA
- 16 CONSIDERACIONES SOBRE EL ORIGEN DE LA CONCEPCION AGROECOLOGICA
- 17 LA REFORMA DEL REGIMEN AGRARIO
- 18 PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DEL NOPAL COMO VERDURA EN MEXICO

PROXIMA APARICION

- MEMORIAS DEL SEMINARIO DE ALTERNATIVAS PARA LA ECONOMIA MEXICANA
- MEMORIAS DEL TALLER DE INVESTIGACION REGIONAL, EL TLC Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO DEL CENTRO NORTE DE MEXICO